



FECHA DEL INFORME DE AUDITORÍA : 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.
TIPO DE AUDITORÍA : DE CUMPLIMIENTO.
ENTIDAD AUDITADA : PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS (PDDH)
CÓDIGO DE RESOLUCIÓN : RIA-UAI-368-2022
TIPO DE RESPONSABILIDAD : NINGUNA.

**Contraloría General de la República. Consejo Superior de la Contraloría General de la República.
Managua, diecisiete de febrero del año dos mil veintidós. Las diez y ocho minutos de la mañana.**

ANTECEDENTES:

A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se le practicó auditoría de cumplimiento a la administración de las cuentas y documentos por cobrar, por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte; y para tal efecto el auditor interno de la entidad auditada, emitió el informe de auditoría de cumplimiento de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintiuno, con referencia: **IN-132-006-21**. Cita el referido informe que la labor de auditoría, se practicó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua, en lo aplicable a ese tipo de auditoría y sobre la base de lo dispuesto en la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado. Que durante el curso del proceso administrativo de auditoría se dio la garantía y tutela efectiva del debido proceso y se cumplió a cabalidad con las diligencias mínimas del mismo, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Nicaragua y la referida ley orgánica de este ente fiscalizador, por lo que se notificó el inicio del proceso administrativo de auditoría a los servidores y exservidores públicos relacionados con las operaciones y actividades sujetas a revisión, siendo éstos: **Darling Carolina Ríos Munguía**, procuradora; **Adolfo José Jarquín León**, subprocurador; **Emilce Karolina Flores Gutiérrez**, directora administrativa financiera; **Jeovanny Teresa Rodríguez Salgado**, exdirectora administrativa financiera; **Jaraneth Jamin Bolaños**, responsable de la Oficina Financiera; **Carol Auxiliadora García Hernández**, responsable de la Oficina de Presupuesto; **Melba Elena Collado Meneses**, responsable de la Oficina de Contabilidad; **Carlos Daniel Larios Pérez**, responsable de la Oficina de Tesorería; **Jeraldin Francis Mendoza Fonseca**, custodio del fondo de caja chica; **Francisco Javier Lola Norori**, asesor legal; **Arlen Dayana Lanzas Morales**, delegada de Rivas/Granada; **Ena Angelina Condega Villagra**, oficial administrativa financiera en la Delegación Rivas/Granada; **Valentín de Jesús Robleto Medina**, delegado de Chontales/Boaco; **Jorge Geovanny Acevedo**, oficial administrativo financiero en la Delegación Chontales/Boaco; **Mercedes Mafalda Pérez Vélez**, delegada de León/Chinandega; **Mario Alejandro Lezama Martínez**, oficial administrativo financiero en la Delegación León/Chinandega; **Violeta Irías Nelson**, delegada de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN); **Denis Wilson Zamora**, oficial administrativo financiero en la Delegación RACCN; **Matilde Isabel Álvarez Hurtado**, delegada de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS); **Amado Rafael Arce Sáenz**, oficial administrativo financiero en la Delegación RACCS; **Holman Aníbal Largaespada Sotelo**, exdelegado en Managua;



María Dolores Gómez Navarrete, delega en Managua; **Valeska Sofía Miranda Requene**, delegada de Matagalpa/Jinotega; **Alexandra Urbina González**, oficial administrativa financiera en la Delegación Matagalpa/Jinotega; **Damaris Molina Argüello**, exoficial administrativa financiera en la Delegación Matagalpa/Jinotega; **Jerry Jaret Ruiz Gradiz**, delegado de Estelí/Madriz/Nueva Segovia; **Reyna del Socorro Calderón Martínez**, exdelegada en Estelí; **Karen Lucía González Aguilar**, responsable de la Oficina de Recursos Humanos; **Karla Vanessa Zamorán**, exsecretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores (SITRADH) y **Marilia Alejandra Salablanca Guido**, exsecretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores (SITRADH), todos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la precitada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el curso del proceso administrativo de auditoría se mantuvo constante comunicación con los servidores públicos de la entidad auditada. Asimismo, en fecha trece de diciembre del año dos mil veintiuno, se dieron a conocer los resultados de auditoría a los servidores públicos relacionados con las operaciones y transacciones sujetas a revisión, quienes expresaron sus comentarios y fueron incorporados en Acta.

RELACIÓN DE HECHO:

Refiere el informe que los objetivos específicos de la labor de auditoría consistieron en: **A)** Evaluar la estructura y funcionamiento de los sistemas de administración y de control interno implementado, para la administración de las cuentas por cobrar. **B)** Comprobar si los registros de cuentas por cobrar de la sede y Delegaciones Territoriales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se encuentran debidamente contabilizados, valuados, autorizados, soportados con la documentación de respaldo suficiente y apropiada, son derechos exigibles y recuperables. **C)** Determinar el cumplimiento de las autoridades aplicables, a la materia en cuestión; y **D)** Identificar los hallazgos a que hubiere lugar y sus responsables. Una vez aplicados los procedimientos de rigor los resultados conclusivos están acorde con los objetivos de la auditoría, de tal manera que: **1)** La estructura y funcionamiento de los sistemas de administración y control interno implementado, en la administración de las cuentas y documentos por cobrar para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, fue efectivo; excepto por un hallazgo de control interno, consistente en: *Debilidades en la documentación que soporta los egresos emitidos a través de anticipos por rendir.* **2)** Los registros de las cuentas por cobrar de la sede y Delegaciones Territoriales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se encontraron debidamente contabilizados, valuados, autorizados, soportados con la documentación de respaldo suficiente y apropiado, son derechos exigibles y recuperables. **3)** Las autoridades aplicables a la administración de las cuentas y documentos por cobrar, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cumplió en todos los aspectos significativos con las leyes, normas y regulaciones aplicables a la materia en cuestión; y **4)** No se identificaron incumplimiento de ley.



CONSIDERACIONES DE DERECHO:

La Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, en su artículo 9, numeral 5) establece como atribución a esta entidad fiscalizadora evaluar los planes y la calidad de las auditorías efectuadas por las Unidades de Auditoría Interna. Adicionalmente, el artículo 43, párrafo tercero de la precitada ley orgánica dispone que la auditoría gubernamental será practicada por la Contraloría General de la República, por las Unidades de Auditoría Interna y las Firmas Privadas de Contadores Públicos Independientes, previamente autorizadas. Que en materia de auditoría gubernamental practicada por las Unidades de Auditoría Interna, el artículo 65 de la misma ley orgánica estatuye que los informes de las Unidades de Auditoría Interna, serán firmados por el auditor interno, y dirigidos a la máxima autoridad de la entidad, copia de tales informes será enviada simultáneamente a la Contraloría General de la República, para los efectos que a ella corresponden. Establecidas las bases legales para las labores de auditorías ejecutadas por las Unidades de Auditoría Interna de la administración pública, y conforme el artículo 95 de la ya mencionada ley orgánica que establece como facultad de la Contraloría General de la República pronunciarse sobre las operaciones o actividades de las entidades y organismos sujetos a esta ley y sus servidores, así como para determinar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en diez años contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas operaciones o actividades. En el presente caso, el informe de auditoría de cumplimiento objeto de la presente resolución administrativa, cumple con los presupuestos, requisitos y procedimientos que establece tanto la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República como las Normas de Auditoría Gubernamental; y en vista que los resultados de la auditoría concluyen con un hallazgo de control interno, se ordena a la máxima autoridad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones de auditoría, contenidas en el informe de autos, conforme el artículo 103, numeral 2) de la ya mencionada ley orgánica, ya que constituyen el valor agregado de la auditoría gubernamental para fortalecer los sistemas de administración, control interno y gestión. De igual manera, les permitirá obtener una seguridad razonable en todas las operaciones que coadyuvará a mantener una administración eficaz, eficiente y transparente en la utilización de los recursos, así como la confiabilidad en la rendición de cuentas. Conforme lo anterior, para su implementación se dispondrá de un plazo razonable de sesenta (60) días, vencido el mismo deberá informar a este Consejo Superior sobre sus resultados. Se previene que de persistir en ello en las auditorías recurrentes, se procederá en su oportunidad al establecimiento de la responsabilidad conforme lo estipula el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

POR LO EXPUESTO:

De conformidad con los artículos 9, numerales 1) y 12) y 95 de la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, los suscritos miembros del Consejo Superior, en uso de las facultades que la ley les confiere, acuerdan:



- PRIMERO:** Admitir el Informe de Auditoría de Cumplimiento de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintiuno, con referencia: **IN-132-006-21**, emitido por el auditor interno de la **PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PPDH)**, derivado de la revisión a la administración de las cuentas y documentos por cobrar, por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte.
- SEGUNDO:** No hay méritos para establecer ningún tipo de responsabilidad a los señores: **Darling Carolina Ríos Munguía**, procuradora; **Adolfo José Jarquín León**, subprocurador; **Emilce Karolina Flores Gutiérrez**, directora administrativa financiera; **Jeovanny Teresa Rodríguez Salgado**, exdirectora administrativa financiera; **Jaraneth Jamin Bolaños**, responsable de la Oficina Financiera; **Carol Auxiliadora García Hernández**, responsable de la Oficina de Presupuesto; **Melba Elena Collado Meneses**, responsable de la Oficina de Contabilidad; **Carlos Daniel Larios Pérez**, responsable de la Oficina de Tesorería; **Jeraldín Francis Mendoza Fonseca**, custodio del fondo de caja chica; **Francisco Javier Lola Norori**, asesor legal; **Arlen Dayana Lanzas Morales**, delegada de Rivas/Granada; **Ena Angelina Condega Villagra**, oficial administrativa financiera en la Delegación Rivas/Granada; **Valentín de Jesús Robleto Medina**, delegado de Chontales/Boaco; **Jorge Geovanny Acevedo**, oficial administrativo financiero en la Delegación Chontales/Boaco; **Mercedes Mafalda Pérez Vélez**, delegada de León/Chinandega; **Mario Alejandro Lezama Martínez**, oficial administrativo financiero en la Delegación León/Chinandega; **Violeta Irías Nelson**, delegada de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN); **Denis Wilson Zamora**, oficial administrativo financiero en la Delegación RACCN; **Matilde Isabel Álvarez Hurtado**, delegada de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS); **Amado Rafael Arce Sáenz**, oficial administrativo financiero en la Delegación RACCS; **Holman Aníbal Largaespada Sotelo**, exdelegado en Managua; **María Dolores Gómez Navarrete**, delega en Managua; **Valeska Sofía Miranda Requene**, delegada de Matagalpa/Jinotega; **Alexandra Urbina González**, oficial administrativa financiera en la Delegación Matagalpa/Jinotega; **Damaris Molina Argüello**, exoficial administrativa financiera en la Delegación Matagalpa/Jinotega; **Jerry Jaret Ruiz Gradiz**, delegado de Estelí/Madriz/Nueva Segovia; **Reyna del Socorro Calderón Martínez**, exdelegada en Estelí; **Karen Lucía González Aguilar**, responsable de la Oficina de Recursos Humanos; **Karla Vanessa Zamorán**, exsecretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores (SITRADH) y **Marilia Alejandra Salablanca Guido**; exsecretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores (SITRADH), todos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).



TERCERO:

Remitir la certificación de lo resuelto a la máxima autoridad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para asegurar la implementación de las recomendaciones derivadas de los hallazgos de control interno, en un plazo no mayor de sesenta (60) días, el que comenzará a contarse a partir de la respectiva notificación y una vez vencido el mismo, deberá informar sobre ello a este órgano superior de control y fiscalización. Se previene que de persistir en ello en las auditorías recurrentes, se procederá en su oportunidad al establecimiento de las responsabilidades conforme lo estipulado en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Esta resolución comprende únicamente los documentos analizados y los resultados de la presente auditoría, de tal forma que, de la revisión de otros documentos no tomados en cuenta, podrían derivarse responsabilidades conforme la ley. La presente resolución administrativa está escrita en cinco (05) folios útiles de papel bond con el logotipo de la Contraloría General de la República, y fue votada y aprobada por unanimidad de votos en sesión ordinaria número mil doscientos setenta y dos (1272) de las nueve y treinta minutos de la mañana del día diecisiete de febrero del año dos mil veintidós, por los suscritos miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República. **Cópiese, notifíquese y publíquese.**

Dra. María José Mejía García
Presidenta del Consejo Superior

Dr. Vicente Chávez Fajardo
Vicepresidente del Consejo Superior

Lic. Marisol Castillo Bellido
Miembro Propietaria del Consejo Superior

Lic. María Dolores Alemán Cardenal
Miembro Propietaria del Consejo Superior

MFCM/MLZ/ LARJ
K/Suárez